

Llg
C.A.Valparaíso.

Valparaíso, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

A folio 1 comparece **HENRY GERARD LÁREZ RIVAS**, abogado, quien interpone acción constitucional de amparo en favor de don **MARCELO DANIEL DE YONG CÓRDOBA** de nacionalidad argentina, , nacido el 26 de febrero de 1965, con domicilio en Bernardo Salas 1382, Villa Bicentenario, Comuna y Provincia de Los Andes, en contra dela **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO (ANTES INTENDENCIA REGIONAL DE VALPARAÍSO)**, que ordenó su expulsión del territorio nacional mediante Resolución Exenta N° 7651, de fecha 02 de julio de 2002.

Indica que el amparado fue condenado con fecha 03 de julio de 2003, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa a beneficio fiscal de 40 tributarias mensuales, a las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en causa ROL: 3328-2000 del Ex 16° Juzgado del Crimen de Santiago, en calidad de autor de un delito de tráfico de estupefacientes (marihuana) contemplado en el artículo 5° de la Ley 19.366, sin beneficios de la Ley 18.216.

Respecto de la orden de expulsión, señala que no tiene una adecuada fundamentación fáctica, y que debe ser el resultado de una investigación racional y justa, además de estar respaldada por pruebas suficientes, agrega que el requisito de fundamentación no se cumple, puesto que no explica suficientemente los hechos sobre los cuales se funda la medida de expulsión dictada en su contra, agregando que “... CÚMPLASE la presente resolución por la Policía de Investigaciones una vez que el afectado cumpla la pena que pueda ser impuesta por la Justicia Ordinaria.” Tal resolución no se ejecutó por los órganos de seguridad; sin embargo, con fecha 27 de septiembre de 2017, el Juzgado 16° del Crimen de Santiago, dictó sentencia, declarando ha lugar a la solicitud de prescripción de la pena corporal y multa, que fuera solicitada por su defendido, declarando asimismo extinguida la responsabilidad penal.

En este caso en concreto, difícilmente puede considerarse que una persona condenada por una sola vez y con pena prácticamente cumplida, por una conducta ocurrida una única vez en su vida, en un momento determinado de ella, pueda ser considerando como dedicarse a dicha conducta, no existiendo por tanto habitualidad de la conducta.



Refiere que el fundamento directo por el cual la Resolución Exenta N° 7651 resuelve la expulsión de del amparado es el hecho de haber sido condenado una vez por un delito.

Alega que es un hecho acreditado que el amparado, registra sólo una condena a pena de simple delito, calificada por la administración dentro de la causal de expulsión del artículo 15 N° 2, lo que denota un criterio peligrosamente extensivo, que atenta contra los principios proporcionalidad y racionalidad que deben estar presentes al momento del ejercicio de las potestades discrecionales por las autoridades y que, en éste caso particular, han lesionado gravemente sus derechos fundamentales.

Añade que existen antecedentes suficientes que dan cuenta que el amparado, es una persona inserta socialmente, que mantiene fuerte arraigo social factores que no pueden ser ignorados. El amparado se ha reinsertado en la sociedad, cumpliendo bien y cabalmente las normas legales, así como colaborando con su comunidad, así como también cumpliendo con sus deberes para con su pareja actual y para con su hija.

Agrega que desde el año 1996, comienza a desarrollar vínculos en Chile, trabaja como empleado en labores como mecánico, genera vínculos con chilenos, mantiene una relación sentimental con ciudadana chilena de nombre doña SANDRA ELENA CORTEZ DONOSO, y fruto de esta relación nace su hija el día 21 de julio de 1998, de nombre CATALINA ANHAI DE YONG CORTEZ, de actuales 21 años de edad, la que se encuentra matriculada en el AIEP, tal y como consta de Certificado de Alumno Regular que acompaña. Indica que el amparado, no mantiene vínculos con su familia de origen en Argentina, y que en territorio nacional ha rehecho su vida de manera pro social, sin nuevo contacto con tribunales de justicia por nuevas causas.

Solicita se acoja la acción declarando que la expulsión materializada a través de la mencionada Resolución Exenta es ilegal y arbitraria, y disponiendo lo necesario para restablecer el imperio del derecho y dejar sin efecto dicho acto administrativo.

A folio 6, informa **Hernán Solís Catalán, Prefecto, Jefe de la Prefectura de Los Andes**, indicando que el amparado mantiene expulsión vigente del territorio nacional por Resolución Exenta N° 765 de fecha 2 de julio de 2002, sujeto a medida de control.

A folio 12, informa **Pedro Adolfo Guerrero Rivera**, por la **Delegación Presidencial Regional de Valparaíso**. Indica que considerando el hecho denunciado por Policía de Investigaciones mediante informe policial N° 362, de fecha 5 de diciembre del año 2000, dicta la Resolución Exenta N° 765, de fecha 2 de julio de 2002, que ordena la expulsión del extranjero

Sostiene que el amparado, ingresó a territorio nacional en calidad de turista por paso fronterizo habilitado, y que posteriormente



fue puesto a disposición del Primer Juzgado del Crimen en causa Rol 64.600-2 por infracción a la Ley 19.366. Que a la fecha de los ilícitos denunciados por PDI, el extranjero se encontraba en el país en calidad de turista por lo que procedía su expulsión.

Luego señala las disposiciones legales pertinentes, para indicar que al momento de expulsión del amparado, se conformaba la causal descrita en el artículo 15 del Decreto Ley 1.094, por lo que la expulsión se ajusta a derecho y que la facultad del intendente para realizar las expulsiones se encuentra en el artículo 1º letra b) del Decreto Supremo N° 818 del Ministerio del Interior.

Añade que la expulsión del territorio nacional se ajusta a derecho, no habiendo motivo plausible para dejar sin efecto la medida, y que se procedió a la misma conforme a las normas que lo facultan, y dentro del ámbito de sus competencias, por lo que la resolución se ajusta a las normas del ordenamiento jurídico vigente.

Señala que la medida de expulsión se encuentra expresamente establecida en el Reglamento de Extranjería e Inmigración en su artículo 146 inciso cuarto en relación al artículo 158 del mismo cuerpo legal.

Finalmente solicita se rechace el recurso en todas sus partes.

A folio 13, se ordenó traer los **autos en relación.**

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que el amparado reclama en contra de la Resolución Exenta N° 765, de fecha 2 de julio de 2002, que decretó su expulsión del territorio nacional.

Segundo: Que de los antecedentes incorporados, se advierte que el amparado fue condenado con fecha 03 de julio de 2003, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa a beneficio fiscal de 40 tributarias mensuales, a las accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en causa ROL: 3328-2000 del Ex 16º Juzgado del Crimen de Santiago, en calidad de autor de un delito de tráfico de estupefacientes, sin beneficios de la Ley 18.216 y por sentencia de fecha 27 de septiembre de 2017, del mismo Juzgado, se hizo lugar a la solicitud de prescripción de la pena corporal y multa, que fuera solicitada por el amparado, declarando, asimismo, extinguida la responsabilidad penal, indicando expresamente que no consta el cumplimiento satisfactorio de la pena.

Tercero: Que el artículo 15 del Decreto Ley N° 1094, señala que *“se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: 2.- Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres”*, luego el artículo 17 del mismo cuerpo legal indica *“los extranjeros que hubieren ingresado al país no obstante encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 15 o que durante su residencia incurran en alguno de los actos u*



omisiones señalados en los números 1, 2 y 4 del artículo indicado, podrán ser expulsados del territorio nacional”.

Cuarto: Que, de conformidad con los hechos y las normas legales mencionadas se desprende que la autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, en un caso previsto por aquellas y con estricto apego a las normas ya citadas del Decreto Ley N°1.094 de Extranjería, razón por la cual la presente acción será rechazada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, **se rechaza** la acción constitucional de amparo deducida en favor de **MARCELO DANIEL DE YONG CÓRDOBA** en contra de la **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO**, que dispuso su expulsión.

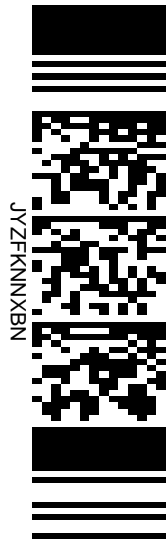
Regístrese, notifíquese, comuníquese por la vía más expedita y, ejecutoriada, archívese en su oportunidad.

Rol Amparo 1775-2021.



Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Rosa Aguirre C., Alejandro German Garcia S. Valparaiso, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.